

C.A. de Santiago

Santiago, cuatro de enero de dos mil veintitrés.

**Vistos:**

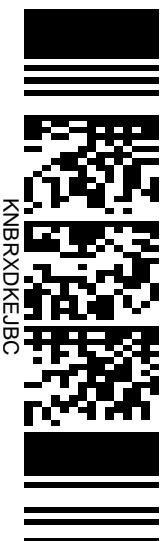
Se elimina de la sentencia de primer grado el fundamento Cuarto.

**Y se tiene en su lugar presente:**

**Primero:** Que el texto del artículo 23 del Decreto Ley N° 3.063 aplicable al caso de la especie disponía que el ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, sea cual fuere su naturaleza o denominación, está sujeta a una contribución de patente municipal. Por su parte, la letra c) del artículo 2° del Decreto Supremo N° 484, que contiene el Reglamento para la aplicación de los artículo 23 y siguientes del Decreto Ley N° 3.063, prescribe que actividades terciarias son aquellas que consisten en el comercio y distribución de bienes (...) y, en general, toda actividad lucrativa que no quede comprendida en las primarias y secundarias.

Ahora bien, según lo preceptuado en el artículo 15 del mismo Decreto Supremo, las únicas personas jurídicas que están exentas del pago de la contribución municipal son aquellas que no persiguen fines de lucro y sólo cuando tengan por objeto y realicen acciones de beneficencia, de culto religioso, culturales, de ayuda mutua de sus asociados, artística o deportivas no profesionales y de promoción de intereses comunitarios, situación en la que según el mérito de los antecedentes, no se encuentra la sociedad ejecutada.

**Segundo:** Que, por su parte, el artículo 24 del Decreto Ley N° 3.063, incorporado por la Ley N° 20.033 de 1 de julio de 2005, dispone que tratándose de sociedades de inversión o sociedades de



profesionales, cuando éstas no registren domicilio comercial, la patente se deberá pagar en la comuna correspondiente al domicilio registrado por el contribuyente ante el Servicio de Impuestos Internos. Para estos efectos, agrega la norma, dicho Servicio aportará esta información a las municipalidades, por medios electrónicos, durante el mes de mayo de cada año.

Esta regla debe ser interpretada armónicamente con lo previsto en el artículo 23, lo que conduce a concluir que las sociedades de inversión pasiva deben pagar la contribución municipal, la cual se determina con la información que cada año el contribuyente entrega al Servicio de Impuestos Internos.

**Tercero:** Que, de este modo, debe concluirse que aun antes de la Ley N° 21.210 era posible considerar que sociedades como la demandante realizaban una actividad calificable como lucrativa, la que no puede sino ser terciaria, pues lo es toda actividad que no sea primaria ni secundaria y únicamente quedan exentas -como ya se dijo- las mencionadas en el artículo 27, precisamente porque su finalidad no es el lucro. Por otro lado, con la Ley N° 20.033 que modificó el artículo 24 de la Ley de Rentas Municipales, en los términos anotados previamente, ha sido el legislador quien expresamente reconoce a las sociedades de inversión como entes sujetos al pago de patente comercial, de modo que no es posible entenderlas excluidas, conclusión que es reforzada en el nuevo texto del artículo 23 reformado por la aludida Ley N° 21.210.

En tales condiciones, la decisión de rechazar la demanda promovida por vía principal debe ser mantenida.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas y en los artículos 186 y siguientes del Código

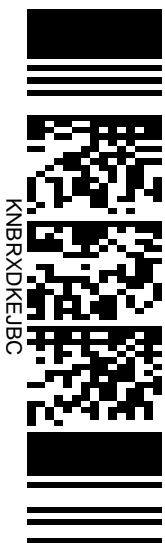


de Procedimiento Civil, se **confirma** la sentencia de uno de agosto de dos mil veintidós, dictada por el Vigésimo Sexto Juzgado Civil de Santiago en la causa Rol N° 3585-2022.

Acordada contra el voto de la abogada integrante señora Vidaurre, quien fue de opinión de revocar la referida sentencia en la parte que desestima la demanda principal deducida por Inversiones San Juan María Limitada contra la Municipalidad de Las Condes y decidir en su lugar que dicha demanda queda acogida, declarando en consecuencia que la aludida compañía no es sujeto pasivo del tributo que consagra el artículo 23 del Decreto Ley N° 3.063, teniendo presente para ello las siguientes consideraciones:

1°.- Que, en primer lugar, el principio rector del Derecho Tributario es el principio de legalidad, en cuya virtud solo por ley -de iniciativa exclusiva del Presidente de la República- se puede imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes, y determinar su forma, proporcionalidad o progresión” (artículo 65 N° 1 de la Constitución Política de la República). Esto significa que no hay tributo sin ley previa, extendiéndose el principio de legalidad garantizado constitucionalmente a todos los elementos de la obligación tributaria, incluyendo el hecho gravado, el cual debe estar adecuadamente descrito en la ley.

2°.- Que, en segundo término, la Ley de Rentas Municipales no gravaba las sociedades de inversiones que solamente obtuvieran rentas de inversiones pasivas con el tributo del artículo 23 de ese cuerpo legal, lo que se desprende de la simple lectura del de la normativa legal vigente antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.210, esto es, el 1 de julio de 2020, lo cual fue recogido en



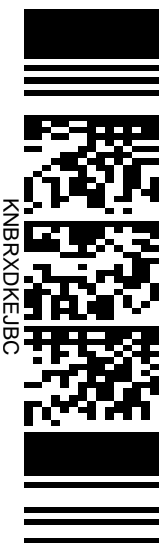
múltiples fallos de la Corte Suprema y en dictámenes de la Contraloría General de la República.

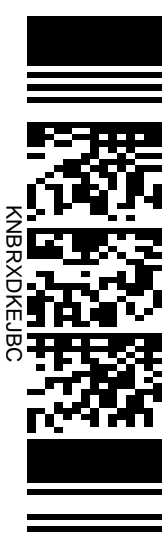
3°.- Que, no obstante lo anterior, la Municipalidad demandada invoca como fundamento de sus alegaciones otros fallos del Máximo Tribunal y otros dictámenes de la Contraloría que sustentan la teoría contraria -cual es que las sociedades de inversión pasiva siempre y en todo momento se han encontrado afectas al pago de patente municipal-, mas sobre este punto se debe enfatizar que el principio de legalidad del tributo, consagrado en la Constitución, impide que se apliquen impuestos por analogía o en virtud de interpretaciones de la ley, requiriéndose texto normativo expreso que describa el hecho gravado, lo que en la especie no ocurría respecto de la actividad desarrollada por la actora hasta el 31 de mayo de 2020, procediendo el pago del tributo del artículo 23 del Decreto Ley N° 3.063 únicamente a partir de la fecha de entrada en vigencia de la citada ley, esto es, el 1 de julio de 2020.

**Comuníquese y regístrese.**

**Redacción del Ministro señor Balmaceda.**

**N°Civil-13783-2022.**





Pronunciado por la Undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministro Jaime Balmaceda E., Ministra Suplente Erika Andrea Villegas P. y Abogada Integrante Barbara Vidaurre M. Santiago, cuatro de enero de dos mil veintitrés.

En Santiago, a cuatro de enero de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

